



Alejandro Schneider
compilador

América Latina hoy

Integración, procesos políticos
y conflictividad en su historia reciente




IMAGO
MUNDI

Alejandro Schneider
compilador

América Latina hoy

Integración, procesos políticos y conflictividad
en su historia reciente





COLECCIÓN ESTUDIOS DE NUESTRA AMÉRICA

Alejandro Schneider (compilador)
América Latina hoy. Integración, procesos políticos y conflictividad en su historia reciente. 1a ed. Buenos Aires: 2014.
224 p. ; 15x22 cm.
ISBN 978-950-793-173-4
I. Historia de Latinoamérica. I. Schneider, Alejandro, comp.
CDD 980
Fecha de catalogación: 7/3/2014
©2014, Alejandro Schneider
©2014, Ediciones Imago Mundi
Distribución: Av. Entre Ríos 1055, local 36, CABA
www.edicionesimagomundi.com
Diseño y armado de interior: Alberto Moyano
Retoque digital de foto de tapa: Jorge Otermin
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Tirada de esta edición: 500 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de junio de 2014 en G impresores, Güiraldes 2727, San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

Índice general

Introducción	
<i>Alejandro Schneider</i>	IX
1 Del comercialismo a la repolitización del vínculo regional. Gobiernos, sindicatos y corporaciones empresarias en el rediseño de la integración latinoamericana	
<i>Julián Kan</i>	I
2 La idea de recursos naturales en Sudamérica. Notas de trabajo	
<i>Bruno Fornillo</i>	31
3 Juventudes, conflictos y políticas en América Latina contemporánea: una aproximación desde los procesos recientes de movilización y organización juveniles	
<i>Pablo Vommaro</i>	47
4 Uruguay en la larga década de 1960: el fin de un modelo y su repercusión artística	
<i>Manuel Martínez Ruesta</i>	73
5 Los años de Lula: trabajadores y movimientos sociales en la historia reciente de Brasil	
<i>Lucas Benielli</i>	97
6 Los avatares en el proceso de politización del movimiento obrero argentino, desde 2008 a la actualidad	
<i>María Florencia Socoloff</i>	121
7 La Bolivia de Evo Morales. Conflictos, tensiones y ambivalencias durante el primer gobierno del MAS (2006-2009)	
<i>Santiago Allende y Federico Boido</i>	145

8	Dificultades políticas y tensiones sociales durante la segunda presidencia de Evo Morales <i>Alejandro Schneider</i>	169
	Autores	189
	Bibliografía	193

Introducción

Alejandro Schneider

.....

América Latina, tierra de contrastes, de montañas, llanos y mares. Lugar donde conviven y coexisten, no sin ciertas dificultades, sociedades milenarias con colectivos migratorios que se trasladan en forma diaria. En este subcontinente se presentan un sinfín de alternativas para pensar y discutir las diferentes problemáticas que cruzan a los pueblos que la habitan. La riqueza de su vibrante historia ha llevado a que se escriban numerosos textos: desde libros hasta poemas y relatos. La presente obra invita a reflexionar sobre lo acontecido en el Cono Sur del continente en las últimas décadas.

El libro busca mostrar un primer avance de los resultados de la investigación realizada en el marco del proyecto UBACyT «Medio siglo de historia política y social en el Cono Sur de América Latina: dictaduras, transiciones y democracias (1964-2009)», que se encuentra radicado en el Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto se ha ido convirtiendo en un fructífero espacio de encuentro para analizar, pensar y comparar ciertos procesos histórico-políticos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay durante esos años.

Estas décadas, en su conjunto, fueron un tiempo donde las situaciones de crisis y de estabilidad estuvieron presentes en todos los órdenes: político, económico y social. En este sentido, durante ese período se han modificado cada uno de los polos de la relación entre sociedad y Estado y, paralelamente, la forma misma de esa relación.

Las transformaciones experimentadas durante el período abordado no nos fueron ajenas a la hora de pensar los primeros proyectos de investigación que dieron origen a este libro. De este modo, recapacitar sobre los mecanismos de vinculación que se implementaron entre los distintos países de la región, del hemisferio y del mundo, pensar las distintas estrategias políticas y mecanismos de resistencia que desplegaron los diversos actores sociales en estas tierras, implica un ejercicio obligado de reflexión que nos propusimos hace unos años cuando comenzamos con esta tarea. De esta manera, es posi-

una gran parte de la población renovó la confianza en la administración del Movimiento al Socialismo (MAS).

Frente a esa coyuntura de permanente transformación, el presente artículo busca analizar y reflexionar sobre una serie de escenarios conflictivos que se plantearon durante los cuatro primeros años del segundo mandato de Morales (2010-2013). En esta ocasión, como un primer esbozo de investigación, se analizó lo publicado en tres periódicos de circulación masiva a nivel nacional: *La Razón*, *La Prensa* y *Página Siete* junto con lo escrito por el principal diario del departamento de Cochabamba (*Los Tiempos*). Cabe indicar que estos medios de comunicación tienen entre sí un notable contraste analítico y político sobre el ejercicio de las presidencias del MAS. A esta información se la confrontó con datos emitidos por una oficina pública: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con los de dos organizaciones no gubernamentales: el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y la Fundación UNIR BOLIVIA, y con informes oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Algunas características generales de las presidencias del MAS

En términos globales, las administraciones del líder cocalero se caracterizan por continuar con el sistema primario exportador que identifica al territorio desde la llegada de los españoles. Aunque el vicepresidente García Linera (2006) ha manifestado que se busca crear un Estado fuerte y desarrollado denominado «capitalismo andino amazónico», esto aún no se ha logrado; la base económica permanece atada a una lógica extractivista nutrida por los altos precios mundiales de algunas materias primas. La producción primaria de bienes no renovables sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país. Esta situación acarrea una serie de consecuencias estrechamente ligadas: primero, reafirma una dependencia respecto a los recursos minerales no reemplazables; segundo, genera una alta vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones del mercado internacional y tercero, reproduce un mercado de trabajo con escaso empleo. De esta manera, el modelo vigente se alimenta sobre la captación de la renta proveniente de las exportaciones y su posterior transformación en ayudas sociales como el bono escolar Juancito Pinto y la Renta Dignidad para los ancianos. A pesar de los discursos a favor de la industrialización, el segundo período de gestión avanzó muy poco en una agenda posextractivista de mediano plazo; aún se mantiene el ciclo rentista donde cerca del 90% del valor exportado se genera por la venta de gas natural, soja, petróleo, plata, oro, estaño, entre otros bienes (INE 2011).

Este panorama económico tiene su correlato inmediato en el ámbito de la ocupación. Al igual que en otros países de la región, los datos sobre el nivel de desempleo difieren, según si las cifras son emitidas por oficinas estatales

o por sectores privados. De este modo, de acuerdo con datos del órgano oficial, INE, la tasa de desempleo en 2011 fue de 5,5%; mientras que para el CEDLA fue de 7,9%.¹ A esto se debe agregar que el 83% de los empleos son considerados como precarios: los trabajadores se desempeñan sin contrato de trabajo, carecen de seguro social, jubilación e indemnización. En cuanto al índice de subempleo, de acuerdo con el CEDLA, este presenta un incremento de 17% en 2011 con relación al año 2010 (CEDLA 2011; CEDLA 2012b).

A esta situación hay que agregar que, por un lado, el mencionado centro de investigación afirma que más de 60% de la población que figura en las estadísticas como empleada, debe considerarse como autoempleada, debido a que se desempeña en actividades económicas informales. Por otro lado, a partir de 2011, el trabajo por cuenta propia (en particular, en la construcción, los servicios personales y el transporte público) permitió el aumento de la ocupación. Sin embargo, no se aclara que es muy grave la precariedad laboral en el ámbito de las labores por cuenta propia. En este sentido, el porcentaje de los trabajadores que tienen una ocupación estable, bien remunerada y protegida por la seguridad social se redujo en la última década a solo 20,9%; el resto tiene un empleo precario (79,1%). Asimismo, cabe indicar que las mujeres son las más perjudicadas, no solo por la segregación que soportan cuando efectúan tareas análogas a las de los hombres, sino por su confinamiento a los empleos menos calificados (CEDLA 2013). En resumen, la generación de nuevas ocupaciones tuvo lugar a expensas de su calidad.

La flexibilidad laboral, sobre todo en lo que se refiere a la precarización en los contratos de empleo, se transforma en una herramienta de primer orden para incidir en el deterioro constante de los haberes percibidos. De este modo, por un lado, los bajos salarios continúan siendo una de las principales variables que caracteriza a este modelo que favorece al capital, representados en multinacionales, terratenientes y cooperativistas, convirtiéndose en un especial atractivo para la inversión extranjera en la producción primaria. Por otro lado, existe una amplia brecha social, ya que la riqueza se concentra en pocas manos: el 20% de la población más rica acapara más del 60% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre solo recibe el 2%. Según un informe elaborado por el PNUD, se observa que siete de cada diez bolivianos son indígenas y están insertos en el sector familiar del mercado laboral, con escasas remuneraciones. Por el contrario, en el estrato de mayores ingresos, seis de cada diez no son indígenas y se insertan en el sector empresarial con sueldos relativamente altos y con mejores condiciones ocupacionales (PNUD 2010). Al igual de lo que sucede en materia de empleo, las mujeres perciben menos salarios e ingresos que los hombres, por idénticas tareas.

El patrón de desarrollo vigente siguió privilegiando al capital por encima de la fuerza de trabajo. A pesar de las nacionalizaciones de los hidrocarburos y de algunos sectores mineros, el poder real lo siguieron detentando las

1. Se puede contrastar estos datos en: INE (2011) y CEDLA (2012a).

empresas transnacionales, aportando al fisco porcentajes insignificantes en relación con sus ganancias. De igual modo, el gobierno aumentó sus reservas financieras, manteniendo las mismas en la banca privada y en bonos del tesoro de los países centrales. La pobreza continuó estando presente más allá del incremento de las reservas internacionales en las arcas del Estado y del crecimiento económico. Aunque los líderes del MAS incorporaron de manera permanente en sus discursos la filosofía del «vivir bien», esto no se tradujo en proyectos orientados a la transformación de la matriz productiva del país. Como se observa en diversos informes publicados por los organismos antes mencionados, la mayor parte de los conflictos desarrollados durante la segunda gestión de gobierno se originaron por problemas económicos: incremento del costo de vida (en particular, en alimentos y transporte), escasez de productos básicos, pugnas por el control de recursos naturales, entre otros.

En general, la mayoría de los observadores sobre el proceso reciente boliviano coinciden en afirmar que el segundo período presidencial de Morales se inició dentro de una coyuntura más favorable que su primer mandato. En ese momento (2006-2009) se enfrentaron con inusitados niveles de violencia las principales corporaciones económicas y políticas pertenecientes a la clase dominante contra los distintos movimientos sociales que anhelaban cumplir con la agenda planteada en octubre de 2003. En esos años prevaleció un claro antagonismo entre el MAS y el grupo opositor constituido por las fuerzas cívico-regionales de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En algunas oportunidades, además, este bloque estuvo apoyado por partidos políticos como el Poder Democrático y Social (PODEMOS) liderado por el ex presidente Jorge Quiroga.

A pesar de ello, en diciembre de 2009, se abrió un panorama alentador para el mandatario boliviano. A grandes rasgos, este logró un amplio triunfo electoral (incluso, su fuerza política contó con la mayoría de miembros en la Asamblea Legislativa Plurinacional), derrotó a la derecha regional liderada por sectores políticos de los departamentos del Oriente del país y, por sobre todo, en enero de ese año se respaldó, a través del voto popular, la creación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). En otras palabras, se consiguió controlar a las instituciones, al régimen y a los diferentes frentes separatistas existentes a nivel local. El MAS se convirtió en un movimiento político y social hegemónico sin precedentes. Sin embargo, ese escenario no alcanzó para evitar que continúen los fuertes conflictos sociales y regionales que se desplegaron en los cuatro primeros años (2010-2013) de su segunda gestión de gobierno.

El objetivo gubernamental de impulsar un modelo de desarrollo industrial en el marco del denominado «Proceso de Cambio» provocó, desde el inicio del segundo mandato de Morales, una serie de problemas y cuestionamientos distintos a los experimentados en el primer período presidencial.

A diferencia de esa gestión, los principales sectores que impugnaron las directivas del Poder Ejecutivo no provinieron del bloque regional del Oriente boliviano, sino desde sus propias bases electorales. Numerosos enfrentamientos terminaron siendo luchas entre grupos pertenecientes a su núcleo original; de este modo, se desplegaron pugnas entre cooperativistas mineros versus asalariados, o bien, indígenas del Oriente contra coccaleros del trópico. De esta manera, en su segunda presidencia, Evo se encontró rodeado por significativos conflictos que debilitaron fuertemente su gobierno e hicieron que fuese confrontado duramente por su tradicional y fiel electorado.

Asimismo, como un elemento necesario para promover este modelo de desarrollo, el Poder Ejecutivo privilegió una estrecha alianza con las corporaciones antiguamente dominantes, poseedoras de las principales riquezas del país y del pasado poder político. En este sentido, no sorprende la abierta aceptación de sus medidas por los enemigos de antaño, como los grupos empresariales de Santa Cruz y Tarija. Por otro lado, el amplio control alcanzado en los diversos órganos del Estado condujo al MAS a contar con una notable concentración de poder en todas las instituciones del régimen, lo que en la práctica se tradujo en una clara posición hegemónica sobre las diferentes organizaciones sindicales y comunitarias.

Todo este panorama ha quedado claramente plasmado en el incremento de las protestas sociales durante el segundo mandato presidencial de Morales. Como ha sido registrado por la Fundación UNIR, durante el año 2010 se desarrollaron en el país mediterráneo 770 conflictos, lo que constituye más del doble de las pugnas acaecidas el año anterior (316 en 2009) y más del triple de las originadas en 2008. Estos datos cobran una mayor relevancia si se los compara con 2011, cuando se alcanza la cifra de 1.304 conflictos. Por otra parte, si bien en el 2012 y en el 2013 los eventos tendieron a disminuir en comparación con el 2011, estos nunca alcanzaron los escasos números de la primera gestión de gobierno (UNIR 2012).

Los siguientes apartados, a grandes rasgos, analizarán algunos de los principales conflictos acaecidos en los cuatro primeros años de gobierno del segundo mandato presidencial de Morales. En ese sentido, se dividió la presentación de acuerdo con los actores sociales involucrados. En primer lugar, se examinará los enfrentamientos protagonizados por aquellos sectores sociales que se encontraban fuertemente identificados con la gestión gubernamental (campesinos, cívicos, indígenas); en segunda instancia, se estudiará el comportamiento desarrollado por la Central Obrera Boliviana (COB) y, en particular, por su núcleo más dinámico: los trabajadores asalariados mineros.

Las bases electorales del MAS se rebelan contra el gobierno de Morales

Uno de los primeros grandes enfrentamientos, ocurridos entre abril y mayo de 2010, fue cuando los pobladores de la zona de Caranavi (La Paz) instalaron un bloqueo carretero pidiendo la construcción de una planta procesadora de cítricos en esa localidad. A raíz de ello se generó un importante desabastecimiento de productos de primera necesidad en la región de las Yungas. Además, en pocas semanas, la pugna se generalizó a otros municipios como Alto Beni y Palos Blancos. Como consecuencia de la protesta, el Poder Ejecutivo dispuso un violento operativo policial de desbloqueo en la ruta que había sido ocupada, ocasionando un choque con un saldo de veintinueve heridos, entre policías y civiles, así como también el fallecimiento de dos jóvenes por armas de uso oficial. Tras los incidentes, el presidente aceptó establecer la fuente laboral demandada por los vecinos del lugar.²

Pocos meses más tarde, en agosto, Morales tuvo un nuevo frente de batalla en uno de los principales distritos electorales del MAS: Potosí. Durante varias semanas, distintos sectores sindicales y sociales enrolados dentro del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) organizaron una contundente protesta ciudadana con bloqueos y paros que aislaron el céntrico departamento del resto del país. La medida de fuerza se hizo en demanda del cumplimiento de las promesas hechas por Evo a sus votantes, entre las que se encontraban la construcción de un aeropuerto internacional, la finalización de la disputa histórica por los límites geográficos con Oruro, la preservación del cerro Rico y la puesta en marcha de la planta de fundición de Karachipampa. En realidad, al igual que con otras querellas similares que se expresaron en esos años, el principal problema radica en que numerosas comarcas, provincias y departamentos no poseen aún definidos sus límites. Esto es un grave déficit que tiene raíces históricas, ya que de acuerdo con la Dirección General de Límites del Ministerio de Autonomía el 80% de los municipios no tienen especificados sus trazados definitivos (Komadina 2012). De este modo, la presencia de valiosos recursos naturales ha incrementado los conflictos en las distintas regiones del país. En el caso de Potosí, frente al aumento del descontento de uno de los principales bastiones electorales de Morales, este aceptó –de manera provisoria– formalmente acordar con los reclamos de los lugareños.³

Cuando parecía que el año 2010 iba a finalizar con mayor calma, en la última semana de diciembre el gobierno tuvo un tercer enfrentamiento con gran parte de su electorado. En esa circunstancia, la crisis se produjo como consecuencia de la promulgación del decreto supremo 748 por el cual

2. Al respecto véase: *La Razón, La Prensa y Los Tiempos*, abril y mayo de 2010.

3. Para más información se puede consultar: *La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos*, agosto de 2010.

se resolvió incrementar el Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados. Corresponde indicar que el propio presidente justificó la medida en razón del «desangramiento» de las arcas estatales por la subvención del precio de dichos combustibles. Según diversos observadores, el «gasolinazo» resultó ser una «confesión de parte» de la administración masista respecto al «fracaso» de la política de nacionalización llevada a cabo, al tiempo que mostró que aún se «depende» de la «decisión de las transnacionales para producir» (Arze Vargas, Espada Vedia y Guzmán Salinas 2011, pág. 159; Almaraz 2012, pág. 18).

A raíz de esta situación, en forma inmediata se produjo un alza significativa en el valor de los carburantes junto con una rápida suba de precios de los productos básicos de la canasta familiar y del servicio de transporte en un orden cercano al 100%. En forma paralela, se desató una ola de rumores sobre una posible devaluación del dólar y el congelamiento de cuentas bancarias. La respuesta popular no se hizo esperar: hubo una protesta masiva de toda la población, a pesar de que las autoridades gubernamentales salieron a aminorar el efecto del incremento de los precios con el anuncio de un futuro aumento de un 20% del sueldo mínimo nacional y en los haberes de la policía, las fuerzas armadas, los trabajadores de la salud y de la educación, entre otras promesas. Asimismo, cabe subrayar que gran parte de las medidas de fuerza se desplegaron por fuera de la voluntad de la cúpula sindical encabezada por Pedro Montes, quien fue duramente cuestionado por sus bases por la actitud dubitativa en esos días.

En sintonía con estos ofrecimientos, sectores sociales afines a Morales, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, la «Bartolina Sisa» y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) expresaron su apoyo al aumento del impuesto a los combustibles. Sin embargo, los comunicados no alcanzaron para detener los paros y las movilizaciones callejeras en los departamentos del occidente del país que, como señalamos, son los bastiones electorales del MAS. En pocas horas, mineros de Huanuni, maestros urbanos y rurales, juntas vecinales, transportistas, seccionales de sindicatos fabriles y de amas de casa exigieron la derogación del impuesto junto con la renuncia de los principales funcionarios de la presidencia si no se retrocedía con la medida. Incluso el descontento generalizado condujo a que cocaleros del Puerto Villarroel, en el Chapare, una de las principales zonas favorables al presidente, realicen un bloqueo de caminos. Al cabo de una semana de enfrentamientos, a pocas horas de que finalizara el año, Evo se vio obligado a derogar el decreto, argumentando que debía «gobernar obedeciendo al pueblo».⁴

4. Testimonio en: *La Razón*, 1 de enero de 2011. Cabe indicar que el presidente también suspendió los aumentos salariales sectoriales anunciados en pleno desarrollo del conflicto.

Otra dificultad para el gobierno provino de los pueblos indígenas de las tierras bajas, sobre todo, de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). A lo largo de toda su gestión, Morales atravesó serios conflictos con dicho sector. La principal forma en que se manifestó esta pugna fue a través de las marchas opositoras a La Paz en contra de la construcción del proyecto carretero que pretende vincular Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), traspasando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS).⁵ Si bien la idea de edificar la autopista era un proyecto de larga data, el presidente en el año 2010 firmó un crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para financiar esa inversión. Cabe observar que detrás de este proyecto se encuentran tanto intereses sectoriales de capitales nativos y extranjeros involucrados en la explotación agropecuaria para la exportación, como grupos cultivadores de coca de la región del Chapare (Quiroga 2012).

En ese sentido, las demandas de la CIDOB no solo buscaron detener la construcción de la carretera y de frenar a los cocaleros sino que también incorporaron numerosos reclamos, entre otros: la titulación colectiva de tierras y territorios, la gestión territorial indígena autónoma, el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, la consulta a través de sus instituciones y la creación de una universidad indígena.

En esta coyuntura, la movilización más importante fue la Octava Marcha de los Pueblos Indígenas por la Defensa del Territorio, la Autonomía Indígena y los Derechos de los Pueblos Indígenas efectuada entre los meses de agosto y octubre de 2011. Esta movilización fue uno de los principales conflictos que impactó en la presidencia de Morales en esos años; la misma tuvo un amplio respaldo de la población, sobre todo, tras la violenta represión gubernamental con heridos ejercida en la localidad de Chaparina. Tras esos acontecimientos, luego de recorrer cerca de seiscientos cincuenta kilómetros, la llegada a La Paz fue recibida calurosamente por distintos sectores de la ciudadanía que se volcaron a las calles para expresar su apoyo a los indígenas (UNIR 2011; Fortún 2012).

En ese escenario, el primer mandatario promulgó la ley 180 de intangibilidad del TIPNIS. Sin embargo, la concesión fue momentánea; pocos meses más tarde Evo impulsó la realización de una nueva movilización solicitando la anulación de la anterior norma. Esta estuvo encabezada por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), entidad creada para sostener los proyectos presidenciales en la región. Como corolario, tras haber arribado a la sede de

5. El área fue creada en 1965 como parque nacional en razón de su amplia diversidad biológica y por su enorme riqueza hídrica. En 1990, como resultado de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas, la zona fue reconocida como territorio ancestral de los pueblos mojeño, yuracaré y chimán. Véase Cortez (2011).

gobierno en enero de 2012, se estableció la ley 222 que explicitó la convocatoria a una consulta previa para la construcción de la carretera. Ante ello, los originarios de la CIDOB efectuaron una novena marcha en el mes de junio de ese año, a la vez que decidieron rechazar el cuestionario desde las propias comunidades del TIPNIS.

De manera clara y contundente en las protestas de los pueblos indígenas de las tierras bajas salió a la luz una de las principales tensiones inherentes en el denominado «Proceso de Cambio» del gobierno: la lógica que privilegia el desarrollo de un capitalismo industrial a partir de la integración al mercado mundial frente a otra que sostiene la defensa de determinados valores ecológicos, sociales y comunitarios. El enfrentamiento por el control del TIPNIS se convirtió en un hecho emblemático para la presidencia de Morales debido a que diversas leyes nacionales reconocen su doble condición: como parque nacional y como territorio indígena. Además, la nueva Constitución establece para los pueblos indígenas la preexistencia de sus naciones, su autogobierno, el manejo de los recursos naturales y el derecho a la consulta. En consecuencia, el bloque social que hasta entonces se hallaba representado en el Pacto de Unidad, entró en crisis: dos de las cinco centrales campesinas que apoyaban al gobierno rompieron con este, mientras que hubo otros sectores, como los cocaleros de Cochabamba y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) que exigieron la construcción de la carretera.⁶

La impugnación de la clase obrera al gobierno de Evo

Durante la segunda presidencia de Morales se experimentó un resurgimiento de la protesta social por parte de la clase obrera y sus principales organizaciones. Si bien, como analizó Fornillo (2009), la relación entre la COB y Evo osciló entre una posición ambivalente y otra favorable, los vínculos durante el segundo mandato terminaron tensándose. Sin duda, uno de los principales puntos de quiebre entre ambos contendientes fue el intento de aumentar el impuesto a los combustibles en diciembre de 2010. A pesar de ello, nunca se llegó a una ruptura definitiva entre los jerarcas laborales y el presidente indígena. Esto vale tanto para el antiguo líder sindical Pedro Montes como para el actual Juan Carlos Trujillo, ambos han mantenido fluidos contactos con Morales, cuestión que ha llevado a que en forma reiterada la cúpula gremial se encuentre negociando cargos parlamentarios y administrativos con el mandatario boliviano a cambio de lograr una relativa «paz social» con el proletariado.

6. El Pacto de Unidad fue una organización creada en mayo de 2007 para apoyar la primera gestión del presidente. En oportunidad de la represión de setiembre de 2011, la CIDOB junto con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se retiraron del mismo.

Antes de comenzar a analizar algunos conflictos específicos, en términos generales se puede observar que los enfrentamientos de la clase trabajadora contra las autoridades nacionales emergieron por fuera de la voluntad de la dirigencia sindical, durante las discusiones anuales por aumentos en los haberes. De este modo, obreros fabriles, asalariados mineros (sobre todo, los de Huanuni), maestros rurales y urbanos y empleados de la salud estatal, presionaron a la dirección de la COB para que encabezase los reclamos salariales. Cabe indicar que en esa puja, el criterio que guió al Poder Ejecutivo fue el de preservar el equilibrio de las cuentas públicas; por ende, siempre quiso que los incrementos concedidos no superasen los índices inflacionarios.

Con ese escenario de fondo, durante los meses de abril y mayo de cada año se produjeron los principales conflictos con la central sindical en demanda de mejoras salariales. En numerosas oportunidades, las protestas se efectuaron con masivas movilizaciones callejeras (algunas de ellas, con fuertes enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad) que intentaron quebrar los números ofrecidos por el gobierno. Sin embargo, el presidente logró, en forma permanente, frenar los reclamos de las bases obreras a través de sucesivos acuerdos con los dirigentes de la central laboral. En este sentido, Evo se vio obligado (en varias ocasiones) a aceptar algún reclamo solicitado a cambio de clausurar las medidas de fuerza. Al respecto, en los siguientes párrafos se analizará lo que ha sucedido entre el 2010 y el 2013.

Durante el primero de los años mencionados, si bien hubo algunas medidas de fuerza, Morales modificó el reclamo original de los sindicatos. En esas circunstancias, el tema que se pasó a debatir fue el proyecto de ley de reforma del sistema previsional en la que se propuso reducir la edad jubilatoria de los trabajadores de 60 a 58 años, que en el caso de los mineros pasaba a los 56 años reducible a 51 para quienes trabajan en «interior mina»; de ese modo, el pedido de suba salarial pasó al olvido. En esa coyuntura solo quedaron protestando, en forma aislada durante un par de semanas, los maestros urbanos en búsqueda de una recomposición de sus haberes.⁷

Por su parte, durante el 2011, los enfrentamientos mantenidos con la central sindical deben enmarcarse a partir de una serie de protestas que continuaron desarrollándose desde fines de diciembre de 2010, cuando el Poder Ejecutivo fracasó en su intento de incrementar el valor de los combustibles. Desde entonces, diferentes sectores sociales prosiguieron sus demandas tanto frente a la suba de precios en los productos de primera necesidad y del transporte público, como por la escasez de algunos bienes alimenticios. En ese escenario, los reclamos salariales liderados por la COB se expresaron a través de bloqueos de caminos, paros de docentes, del área de la salud, etc. Ante ello, el gobierno no solo se valió de la represión policial sino que también apeló a que diversas organizaciones sociales identificadas con su gestión (campesinos, interculturales, cocaleros) se movilizan contra esos sectores.

7. Esto se explica en: *La Razón*, 14 y 25 de mayo de 2010.

Sin embargo, el resultado fue que tras una serie de reuniones, la dirigencia laboral acordó una mejora salarial de 10 % y la promesa gubernamental de la derogación total del decreto supremo 21.060.⁸

En el año 2012 las protestas que se enmarcaron en torno al aumento salarial también fueron muy extensas. No obstante, la nueva dirección de la COB, liderada por Trujillo, se despegó de ese reclamo para acordar con Evo poner en agenda otros temas que se hallaban en litigio.⁹

Por último, en mayo de 2013, en comparación con los años anteriores, el movimiento obrero boliviano protagonizó uno de los enfrentamientos más importantes del período. Desde las movilizaciones y protestas originadas contra las políticas económicas neoliberales de mediados de la década del ochenta no se apreciaba una masiva presencia de la clase trabajadora en las calles y rutas en todo el país. Las mismas se produjeron en torno a la ley de Pensiones 65, por la cual el gobierno se aferró en mantener los lineamientos básicos diseñados por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, en 1996.¹⁰ Por medio de esa norma el financiamiento de la jubilación recae en los asalariados (los empresarios solo aportan un 3 %) mientras que el Estado no efectúa aportes (solo abona la Renta Dignidad a los mayores de 60 años). En ese marco, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúan gestionando el sistema, en tanto los trabajadores no intervienen en su control; esto provoca una fuerte situación de desigualdad entre los jubilados: mientras la mayoría cobra el 60 % de los haberes, los miembros de las fuerzas armadas perciben un ciento por ciento en su retiro, entre otras cuestiones.

El reclamo de la COB se inició en demanda de una mejora sustancial de la renta recibida (reclamó una jubilación mínima de 8.000 bolivianos para los mineros y de 5.000 para el resto de los trabajadores) junto con la posibilidad de mejorar algunos artículos de la mencionada ley. En función de ello, la central obrera dispuso un paro general de actividades que tuvo una amplia repercusión, como pocas veces había ocurrido en el último lustro. Durante las dos semanas que persistieron los enfrentamientos, se produjeron cerca de cuarenta puntos de bloqueos en rutas y calles, movilizaciones masivas en cada uno de los departamentos del país, huelgas en el magisterio, el área de la salud, los mineros y los operarios fabriles. Entre algunas de las acciones efectuadas, se destacó el sitio alrededor de la Plaza Murillo, en la

8. El decreto supremo 21.060 fue la norma jurídica que reorientó por completo la economía boliviana hacia el neoliberalismo bajo la presidencia de Víctor Paz Estenssoro en 1985. Al respecto, sobre las negociaciones de la COB con Morales se pueden consultar: *La Razón*, *La Prensa*, *Página Siete* y *Los Tiempos*, marzo y abril de 2011.

9. Información extraída de *La Razón*, *La Prensa*, *Página Siete* y *Los Tiempos*, mayo de 2012.

10. Entre 1955 y 1996 estuvo vigente el sistema de reparto fundado en la solidaridad de los trabajadores con una mayor contribución por parte del empresariado y del Estado. La renta de jubilación equivalía al 70 % del referente salarial.

ciudad de La Paz, que protagonizaron cuatro mil mineros procedentes de Huanuni. Ante el desarrollo de estas medidas de fuerza, el Poder Ejecutivo declaró ilegal la protesta, dispuso la detención de cerca de cuatrocientos trabajadores, reprimió en la localidad de Parotani a los asalariados fabriles y a los mineros en el punto de bloqueo de Caihuasi. En este último sitio, ante el brutal accionar policial que provocó una decena de obreros heridos de bala y cien detenidos, los trabajadores del subsuelo dinamitaron el puente. De manera paralela, al igual que en otros conflictos, Morales y su vicepresidente descalificaron la pugna gremial acusando a los dirigentes sindicales como «golpistas», a la vez que convocaron a algunas de sus organizaciones afines como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» (FNMCB-BS), a movilizarse contra los huelguistas y manifestantes obreros.

Tras dieciséis días de paro y luego de diferentes reuniones mantenidas con emisarios del gobierno, la COB redujo el monto de los haberes originalmente solicitados a la par que acordó un cuarto intermedio de negociación con las autoridades ministeriales. Por otra parte, como consecuencia de la protesta, Evo mandó a procesar a veintidós mineros de Huanuni acusados por la voladura del puente de Caihuasi, impulsó la revisión de las cuentas de la Empresa Minera Huanuni (EMH) buscando suspender el control obrero colectivo y sugirió la posibilidad de que esta última compañía pudiese convertirse en una cooperativa.¹¹

Como parte de esa coyuntura y paralelo a los enfrentamientos encuadrados dentro de la COB, los mineros han participado – por distintos motivos específicos – de numerosos choques contra el Poder Ejecutivo. Desde el inicio del primer mandato de Morales, los asalariados del subsuelo participaron de numerosas medidas de fuerza tanto en el seno de la central gremial como por fuera de ella. Si bien tras las reformas de 1985 su papel tendió a disminuir, su protagonismo volvió a crecer en un contexto signado por el alza mundial de los precios de los minerales junto con una creciente demanda por su extracción. De esta manera, poco a poco, los asalariados mineros organizados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), retomaron su fuerte presencia (como lo hicieron durante décadas) en el conjunto de la sociedad boliviana (Zavaleta Mercado 1988).

A pesar de que en la campaña electoral de 2005 el líder cocalero argumentó a favor del renacimiento de la minería estatal bajo la COMIBOL, su administración se caracterizó por fortalecer al ámbito privado liderado por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Lejos de la promesa de buscar la renacionalización del subsuelo, el principal interés de Morales fue el de continuar con la estrategia capitalista de los años noven-

11. Una crónica detallada en *La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos*, mayo a septiembre de 2013.

ta de fomentar los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras.

Con ese panorama de fondo, la FSTMB empezó a pujar por restablecer el papel histórico de la COMIBOL y de la minería estatal. Los acontecimientos de Huanuni en octubre de 2006 expresaron, entre otras cuestiones, el descontento reinante con la política oficial del gobierno (Mokrani 2006; Fornillo 2007). Si bien tras este hecho, el yacimiento del cerro Posokoni se nacionalizó junto con otras empresas ligadas a la fundición de minerales, los problemas en este ámbito no finalizaron. A pesar de estos inconvenientes, el sector cooperativista continuó recibiendo un fuerte respaldo en términos políticos y financieros desde el Palacio Quemado. Por otra parte, el Poder Ejecutivo continuó con su política laboral de no objetar ni castigar a las cooperativas por las pésimas condiciones de empleo que impera en ese espacio de trabajo (Espinoza 2010).¹²

En la segunda presidencia de Morales, el sector minero continuó en ascenso beneficiado por el alza de los precios de las materias primas. Por otro lado, el Poder Ejecutivo siguió con la política de conformar distintas alianzas con los diversos componentes del mundo del subsuelo: grandes empresarios, cooperativistas y asalariados.¹³ De este modo, en parte, esto explica el aumento de las pugnas entre los asalariados y las cooperativas por el control de los yacimientos. La elevada cotización internacional de los minerales acentuó la clara dependencia de Bolivia de la exportación de materias primas, lo que derivó en las constantes disputas entre diferentes actores. Según la pesquisa efectuada, los mayores enfrentamientos, algunos en forma extremadamente violentos, se sucedieron en la región occidental del país; sobre todo, en aquellas áreas con mayor concentración de minerales, como en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro.

Así, por ejemplo, durante el año 2011 se desarrollaron varias protestas de cooperativistas, mineros asalariados y campesinos, por el control y explotación de diversos centros. Entre otras, se observa lo ocurrido en las provincias Arque y Tapacarí, en Cochabamba, por los yacimientos de piedra caliza; la de cooperativistas en la provincia de Dalence en Oruro y la de Bolívar, en Cocha-

12. Los cooperativistas mineros funcionan bajo principios idénticos al de una empresa privada. La gran mayoría de los socios son gente humilde; sin embargo, dentro de ellas actúan empresarios que no pagan impuestos y regalías, empleando mano de obra en forma precaria, sin beneficios sociales. Además, carecen de medidas de seguridad en los socavones y no efectúan inversiones de prospección y exploración minera, entre otros temas.

13. Cabe indicar que la CPE identificó tres protagonistas de mundo del subsuelo: las cooperativas, la empresa privada y el Estado. Para el año 2011 el sector público está representado por la COMIBOL, quien empleó a 5.700 trabajadores, en tanto el sector cooperativista estuvo integrado por 58.100 mineros; esta notable diferencia surge como consecuencia del proceso privatizador posterior a 1985. *La Prensa*, 29 de julio de 2012.

bamba, por la explotación de estaño; la de Coroma en Potosí y Quillacas, en Oruro, por la explotación de piedra caliza; la de la mina Yaco, en la provincia Loayza de Potosí; la de la mina Víbora, en Potosí; la de la mina Amayapampa, en la provincia de Bustillo de Potosí; la de mineros de Sayaquira, en la provincia de Inquisivi de La Paz, por el estaño; la de mineros de Laramcota y la de Chojñacota, en la provincia de Loayza de La Paz; la del Mutún, en Santa Cruz, solicitando inversiones (estatales o extranjeras) para la producción de hierro; y la de los dragueros de oro, en Santa Cruz, exigiendo la protección de la cuenca del río Piraí y la reglamentación de las tareas del sector (Quiroga 2012).

Por su parte, en el año 2012, el principal motivo de enfrentamiento fue por las tomas de los yacimientos por las comunidades y los cooperativistas. Verbigracia, en el mes de mayo, estos últimos avasallaron la mina de Colquiri en La Paz; hasta ese momento, la empresa operaba bajo la modalidad de riesgo compartido (en convenio con la COMIBOL) por la compañía Sinchi Wayra, una filial de la multinacional suiza Glencore. A partir de entonces, durante cinco meses, se desarrolló una puja incesante entre las dos principales entidades que organizan al sector: la FSTMB y la FENCOMIN. En ese lapso, se desataron duros enfrentamientos con dinamita (que provocaron decenas de heridos y un muerto), capturas de rehenes, paros en centros mineros, bloqueos de rutas y movilizaciones a La Paz. Frente a ello, Morales decidió nacionalizar el yacimiento, pasando su gestión a la COMIBOL; en forma simultánea, permitió que una de las mejores vetas (la denominada Rosario) fuese en un 50 % explotada por los cooperativistas.

Por fuera de ese problema específico, al igual que en Huanuni durante el 2006, en lo anteriormente expuesto se expresa la política del MAS para el sector minero. Por un lado, los trabajadores asalariados exigieron en todo momento la nacionalización de los yacimientos y su control por medio de la COMIBOL; por el otro, los cooperativistas (junto con el gobierno) postularon su derecho a la explotación minera, basándose en lo expresado en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). De esta manera, como consecuencia de la radicalidad de la propia lucha en torno a la contienda de Colquiri, cuando los cooperativistas bloquearon durante cuarenta y ocho horas todos los caminos del país, la FENCOMIN logró la firma de un decreto supremo suscrito por el presidente que alteró por completo los términos de explotación de la Reserva Fiscal Minera, en detrimento del Estado nacional boliviano.¹⁴

En forma paralela aconteció la disputa por la explotación de la mina Mallku Khota en territorio indígena originario del norte de Potosí. Desde el

14. Hasta ese entonces, el Estado boliviano era el único propietario de los recursos mineralógicos de la Reserva Fiscal Minera. Esta norma legal, desde sus orígenes, había sido duramente cuestionada por los cooperativistas y los empresarios privados, nacionales y extranjeros. Con la nueva disposición legal, Morales acalló estas críticas.

año 2003, la zona fue regentada (con el respaldo del gobierno del MAS) por un consorcio subsidiario de la firma canadiense South American Silver. A partir de entonces, la empresa promovió una política de adquisición de concesiones y de cooptación de dirigentes comunitarios por medio de diversas compensaciones sociales y facilitando fuentes de empleo. Sin embargo, esta situación no fue totalmente aceptada por la mayoría de la población; esto condujo a que diferentes ayllus del lugar hiciesen numerosas asambleas y cabildos con el objetivo de expulsar a la compañía y exigir al Poder Ejecutivo la reversión de las concesiones otorgadas (Jiménez y Campanini 2012).

Con ese panorama de fondo, el enfrentamiento se inició en mayo de 2012 a raíz de que una tropa policial ingresó con violencia en la comunidad, invadiendo las viviendas, gasificando a los pobladores e intentando capturar a una serie de dirigentes locales. Esto derivó en cinco meses de tomas con rehenes, movilizaciones a La Paz y choques con las fuerzas de seguridad que dejaron un saldo de un campesino muerto y varios heridos. Tras esos acontecimientos, Morales firmó un decreto supremo donde se nacionalizó la reserva, asignando a la COMIBOL la administración del yacimiento.¹⁵ No obstante, la contienda no finalizó. Los asalariados reunidos en la FSTMB insistieron que la nacionalización no contemplase la participación de los cooperativistas y que, en la directiva sindical de los trabajadores de la empresa estatal, se incluyera la participación de los ayllus, ingresando los comunarios de la zona de acuerdo con las necesidades laborales de la COMIBOL. De ese modo, hasta mediados de octubre prosiguieron las pugnas violentas con heridos entre comunarios del lugar y ex cooperativistas y campesinos que apoyaban la presencia de la multinacional canadiense; esto condujo a que el presidente decidiera otorgar una custodia militar permanente a la reserva.

Corresponde subrayar que en todos los acontecimientos mencionados, y a medida que se desarrollaban los hechos, las empresas transnacionales, los concesionarios y los consulados extranjeros denunciaron a las autoridades locales y nacionales la falta de seguridad jurídica que atravesaban frente a los avasallamientos y ocupaciones de minas que se sucedían.

Finalmente, durante el segundo mandato presidencial, existieron además una serie de protestas específicas en torno a suspensiones, despidos y el cobro de haberes atrasados en el conjunto del movimiento obrero. Estas ocurrieron tanto en oficinas públicas (empleados de la gobernación de Tarija, municipales y educadores de El Alto, trabajadores de la sanidad de Chuquisaca, etc.) como en el ámbito privado (en el canal Full TV, en la alimenticia PIL y en la fábrica de plástico Belén, entre otras empresas). Asimismo, en ambos sectores, se desarrollaron numerosas medidas de fuerza en demanda de mejoras de las precarias condiciones de empleo; por ejemplo, en los

15. Luego de suscribir el acuerdo, el primer mandatario reconoció su «error» por «no convocar» en forma inmediata a los comunarios de la región para resolver el problema, y por ello, ofreció sus disculpas. *La Razón y Página Siete*, 11 de julio de 2012.

municipios de Oruro, El Alto y Quillacollo, en la Caja Nacional de Salud, en la Empresa de Correos de Bolivia y en distintas plantas fabriles de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Cabe observar, en este breve repaso, que una de las pugnas más importantes fue la desplegada por los médicos, quienes impugnaron el decreto supremo que dispuso la extensión de la jornada laboral de seis a ocho horas en los hospitales, sin la correspondiente compensación salarial. Durante el reclamo, los trabajadores de la sanidad denunciaron el problema estructural de la salud solicitando la construcción de la infraestructura adecuada y mejores equipamientos e insumos. Tras más de cincuenta días de enfrentamientos, el Poder Ejecutivo suspendió la norma, hasta la convocatoria de una futura Cumbre Nacional de Salud (Leaño 2012).

Algunas características de los conflictos y su resolución por parte del gobierno

En el presente apartado se intenta caracterizar algunas de las principales características que adoptaron las medidas de fuerza durante la segunda gestión presidencial de Morales así como también su tratamiento por parte del gobierno.

En primera instancia, en gran medida, las disputas las desplegaron los propios votantes de Morales, y no los tradicionales grupos políticos que le eran antagónicos, como aconteció durante el primer mandato. Como se verificó en todos los enfrentamientos mencionados, los sectores que se movilizaron y protestaron contra las políticas gubernamentales fueron en su mayoría, con la excepción de los pobladores del TIPNIS, electores de los departamentos occidentales, sobre todo, indígenas, mineros asalariados, personal del magisterio y de la salud. Aunque, como particularidad, cabe subrayar que la lucha contra el aumento de la gasolina tuvo un carácter ampliamente popular que incluso abarcó a campesinos y cocaleros, principal base electoral del MAS.

En cuanto al tipo de enfrentamiento desarrollado se caracterizó por paros activos con movilización a las sedes de los gobiernos comunal, departamental y nacional. Asimismo, algunos embates, como las disputas por las vetas mineras, se hicieron con ocupación de yacimientos y tomas de rehenes. En numerosas ocasiones estas pugnas se desarrollaron en forma violenta.

En lo que respecta a los reclamos planteados se pueden calificar, a grandes rasgos, de dos formas. Primero, estos emergieron como consecuencia de problemas locales con las autoridades nacionales (Caranavi, Potosí, TIPNIS, centros mineros); en este sentido, las demandas se hicieron contra el gobierno por el incumplimiento de las propias leyes que impulsó, ya sea porque violaron los derechos constitucionales de los indígenas tanto en la preservación de las denominadas áreas ambientales protegidas, como por

los acuerdos firmados en torno a las concesiones de yacimientos. Segundo, se originaron por disputas estrictamente económicas, como fueron las protestas contra el alza de los combustibles, el pedido de incrementos salariales, la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a los empleos.

Si bien en numerosas ocasiones se ha descrito que el país posee una sociedad densamente organizada, una de las formas en que se ha presentado esta característica es por medio del alto nivel de conflictividad económica, social y regional existente dentro de un precario ámbito institucional, en donde prácticamente el Estado se encuentra ausente. Asimismo, coexiste con una cultura y una praxis política que se sintetiza en medidas de presión que atestiguan un alto grado de radicalización en los enfrentamientos, en donde sobresale, como particularidad, que en la práctica no funcionan las instancias intermedias de diálogo entre los actores intervinientes. Los mandatos presidenciales de Morales no escaparon a este singular panorama.

En la mayoría de los conflictos analizados se observa que estos se iniciaron sin ningún tipo de instancia de previa conversación. Si bien de acuerdo con la lectura de la prensa, se puede advertir la existencia de antecedentes en los reclamos, los sectores afectados optaron por la movilización y el propio enfrentamiento antes que la búsqueda de un entendimiento con las autoridades. De este modo, se despliega una lógica donde prima la fuerza de la presión y luego la negociación. Por otro lado, el desenvolvimiento de este accionar facilita el posicionamiento en forma rápida de los reclamos en la agenda política y mediática (Komadina 2012). En cierta manera, como sostiene Rojas (2012), la sociedad boliviana se identifica por practicar una suerte de «democracia callejera», la cual se caracteriza por la existencia de numerosos conflictos en donde diversos sectores sociales compiten con fervor por una cierta redistribución de poder.

La reacción del gobierno frente a estos reclamos ha transitado por un mismo sendero en casi todas las ocasiones. A grandes rasgos, sus respuestas se caracterizaron por dejar que las protestas se diluyeran o se resolvieran en el ámbito de las autoridades locales. Cuando superaron esa instancia, se las descalificó y se las hostigó con argumentos de que las mismas fueron originadas por intereses espurios, ajenos a los reales problemas de la sociedad afectada. En ese sentido, se las denunció como una conspiración motorizada por grupos políticos opositores, los departamentos del Oriente o por Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de derrocar a Morales. Siguiendo esta línea de pensamiento, García Linera, en reiteradas ocasiones, ha estigmatizado a los distintos sectores en conflicto (FSTMB, COB, CIDOB, etc.) como adversarios del «proceso de cambio», por ende como «conspiradores» y «agentes de derecha».

De manera simultánea, el primer magistrado recurre al auxilio de sus grupos de apoyo más cercanos y directos, como los cocaleros del Chapare, las Bartolinas, los campesinos de la CSTUCB, etc., para que efectúen movi-

lizaciones paralelas en solidaridad con su gestión. Llegado a ese plano de confrontación, en no pocas oportunidades el gobierno también apeló a la represión provocando varios heridos y muertos. En este sentido, la carencia de una instancia previa de negociación, la beligerancia discursiva empleada contra los opositores que se manifestaron y la convocatoria a sectores cercanos del Poder Ejecutivo para que confronten con los manifestantes llevó a transitar un sendero de violencia. Al respecto, los ejemplos de Huanuni, en el primer mandato, y los de Coroma/Quillakas, Mallku Khota y Colquiri, en el segundo, son elocuentes.

Alcanzado esa instancia, el presidente diluía la protesta interviniendo en forma personal y, en general, cediendo en las posturas iniciales que motivaban los reclamos, como fueron los casos de Caranavi, el aumento del impuesto a los hidrocarburos, la creación de la carretera por el TIPNIS, las medidas pensadas para la explotación minera, entre otros conflictos. De esta forma, el gobierno en la mayoría de las ocasiones intervino en forma tardía, modificando sus planes e intereses originales.

Si bien el MAS, desde su nacimiento, fue ideado como un «instrumento político» de las organizaciones sociales, su ejercicio en la administración pública distó de abrir las puertas a una verdadera participación comunal. A través de las distintas conflagraciones estudiadas, se observa que la resolución última de las mismas pasaron exclusivamente por la intervención de Evo: en él se centralizaron siempre todas las decisiones. Cada sector que se movilizó, en búsqueda de sus reclamos, pidió la intervención del presidente, en vez de que lo hicieran sus ministros. Esto llevó a que el partido gobernante, en su conjunto, no participara de las medidas, a contramano de cómo había sido pensado el MAS por las organizaciones: como una herramienta colectiva distinta a las tradicionales agrupaciones partidarias. En última instancia, en la mayoría de los enfrentamientos analizados, el Poder Ejecutivo es el principal sujeto político demandado, convirtiéndose en el más importante generador de los conflictos, a la vez que es el encargado de resolverlos. Esto tiene un fuerte impacto en el armado institucional boliviano ya que el resto de los organismos estatales quedan desplazados de las decisiones.

A pesar de que numerosas medidas de fuerza presentaron un elevado índice de radicalidad y que, a través de su propia dinámica, se desarrollaron hechos de violencia, esto no significó una impugnación al sistema democrático, ni se puso en riesgo la gobernabilidad del país. Por otro lado, tampoco el MAS dejó de ocupar el centro del campo político sino que continuó controlando la casi totalidad de las instituciones públicas y un gran número de organizaciones sociales.

Finalmente, corresponde observar que el gobierno es consciente de esta coyuntura de descontento social con su gestión; en este sentido, el segundo mandato estuvo cruzado por un fuerte desgaste frente a la población, como lo demostró el permanente cambio de ministros. Por su parte, García Linera

ha mencionado en diversas circunstancias que se estaba transitando por la quinta fase del denominado Proceso de Cambio, la cual era definida por la presencia de «tensiones creativas» en el interior del bloque popular (para una síntesis de esta postura, véase García Linera 2011)

Conclusiones

A pesar de ciertas mejoras en algunos indicadores sociales, el desempleo, los bajos salarios y la calidad del empleo se mantuvieron entre los problemas más acuciantes de la sociedad boliviana. En cierta forma, en aras de construir un capitalismo desarrollado, el Poder Ejecutivo siguió privilegiando el interés del gran capital y los equilibrios macroeconómicos, en desmedro de las condiciones de vida de los trabajadores, los campesinos y las comunidades originarias, siendo, estos últimos sectores sociales, los principales grupos que acompañaron al mandatario con su voto.

La segunda gestión presidencial expresó, en numerosas circunstancias, cómo los objetivos del gobierno en materia económica chocaron con los intereses y los deseos de los sectores más desfavorecidos. Asimismo, en el presente capítulo se observó que las demandas provinieron tanto de las bases sociales que conformaron originalmente al MAS (campesinos, indígenas, etc.) como de la tradicional clase obrera minera asalariada.

Si bien numerosos conflictos se caracterizaron por poseer inusitados niveles de violencia, en particular por la represión ejercida desde las autoridades, los sectores sociales que se manifestaron lograron acceder a sus objetivos por la fuerza de su movilización y su capacidad de presión. En este sentido, esto condujo a una situación de fuerte desgaste de la figura de Morales, lo cual lo ha hecho retroceder en determinadas ocasiones, reconociendo – aunque sea de manera formal – sus «errores». En cierta manera, Evo muestra su pragmatismo como antiguo líder sindical, el cual se acomoda frente a los reclamos de sus bases en el marco de una lógica caracterizada por la tensión y la negociación. De este modo, se vio obligado (en varias oportunidades) a aceptar alguna demanda solicitando como prenda de cambio la finalización de las medidas de fuerza. Por otra parte, esto no significa que se haya puesto en cuestión el sistema democrático ni que peligre el propio gobierno; más allá del descontento de muchos sectores sociales, la gobernabilidad nunca ha sido puesta en peligro.

En síntesis, nada indica que los restantes meses de su gobierno presenten sustanciales diferencias respecto de los primeros años de gestión. Asimismo, tampoco se descarta que, pese a las protestas desarrolladas y del fastidio que Morales genera en un amplio sector de su tradicional electorado, cuando se vuelva a candidatear para un tercer mandato a presidente, es muy probable que nuevamente sea elegido por el voto popular.